

# La fisura del estado como expresión de la crisis política de la burguesía en Bolivia

**Tania Aillón Gómez \***

\* *Socióloga y economista,  
Magíster en Ciencias  
Sociales. Docente  
e Investigadora del Instituto  
de Estudios Sociales  
y Económicos de la  
Universidad Mayor  
de San Simón  
en Cochabamba, Bolivia.*

---

El proceso de aplicación de la política neoliberal en Bolivia es la lucha entre la fracción de la burguesía nativa ligada a los intereses del gran capital transnacional, y los sectores sociales afectados por las medidas de política económica y social, que recortaron los espacios laborales y las conquistas sociales. Se trata de un hecho contradictorio: avances, retrocesos, derrotas y victorias, tanto desde la perspectiva de los intereses de la burguesía, como desde los objetivos de la resistencia popular.

Pese a su complejidad, este proceso encuentra una síntesis de su evolución en la crisis política de la burguesía, que se muestra en la fisura de las funciones del Estado, desde abril del año 2000 (en vísperas de la "guerra del agua") y que se manifiesta nuevamente, en febrero de 2003, luego del anuncio del gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) de que se aplicará el impuesto directo a sueldos y salarios para disminuir el défi-

cit fiscal. Esta fisura del Estado permite identificar las limitaciones económicas y políticas que encara la burguesía nativa para sostener el modelo de acumulación vigente, y es también un indicador de la tendencia de la lucha de clases y de los derroteros por los que transita el proceso histórico boliviano. Ahí radica la importancia de detenerse a analizar las determinaciones que la configuran.

### **El desgaste de los instrumentos de legitimación del Estado en la etapa neoliberal**

El Estado, como órgano de dominación de la clase capitalista, cumple funciones para preservar las relaciones sociales vigentes. Funciones sin las que la reproducción de éstas sería imposible. En términos de los clásicos, el Estado: “[A]l ser la confesión de que la sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables, que es impotente para conjurarlos (...) se hace necesario como poder situado aparentemente por encima de la sociedad (...)” (Engels, 1997: 68-67). Las funciones del Estado pueden ser legitimadoras del régimen imperante cuando utiliza métodos persuasivos para obtener el consenso de las clases subordinadas de la sociedad, o pueden tener un carácter abiertamente represivo cuando los métodos persuasivos no dan resultado. Ambas funciones son realizadas de forma combinada por el Estado, como herramientas de dominación, de acuerdo a la correlación de fuerzas de clase imperante.

La fisura en las funciones del Estado supone el resquebrajamiento de los cimientos de las mencionadas herramientas de dominación. En el caso boliviano (un “eslabón débil de la cadena capitalista mundial”), la política neoliberal a la que recurrió la burguesía nativa acicateada por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional<sup>1</sup> para revertir la crisis del patrón de acumulación de capital vigente de 1952 a 1985 provocó modificaciones profundas en las reglas de generación y distribución del excedente económico. De un patrón de acumulación basado en la presencia gravitante del Estado en los sectores estratégicos de la economía y en la capacidad definitiva de aquél para influir en los circuitos del excedente (Grebe, 1999: 58), se pasó a un modelo de acumulación centrado en los grandes consorcios transnacionales, que son los que ahora influyen de manera decisiva en la forma en que se genera y distribuye el excedente económico.

Con el fin de que las funciones estatales provean las condiciones generales de reproducción del capital más adecuadas al modelo de acumulación puesto en marcha, se procedió a realizar ajustes en la política de redistribución del excedente social (un instrumento de legitimación del Estado) y en las políticas de provisión de condiciones para la producción y realización del capital. Ajustes que, como veremos, favorecieron abierta-

mente a las exigencias de acumulación de la burguesía transnacional a costa de minar los instrumentos de legitimación del Estado.

### **Cambios en la política estatal de captación y redistribución del excedente económico**

Los ingresos fiscales del Estado boliviano, que estaban compuestos sobre todo por transferencias directas de los beneficios de las empresas estatales al Tesoro General de la Nación (TGN)<sup>2</sup>, se vieron drásticamente recortados con la privatización de aquéllas. Para revertir esta situación, con la lógica de continuar favoreciendo al desempeño del gran capital privado, se aplicó una batería de impuestos indirectos, destinados a gravar el consumo de la población. La política tributaria petrolera muestra con claridad los efectos del cambio en la política estatal de captación del excedente: mientras que en 1995 el 96% de la transferencia petrolera al TGN provenía de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y sólo el 4% estaba compuesto por impuestos indirectos, en el año 2001, en plena vigencia de las reformas del sector petrolero, el 62% del aporte petrolero al TGN está formado por impuestos indirectos; sólo el 4% corresponde al impuesto que grava la utilidad de las empresas petroleras, y el restante 34% está constituido por las regalías departamentales y participaciones de YPFB (Villegas, 2002: 108-109). Para consolidar esta política tributaria, el impuesto especial a los hidrocarburos (IEHD), un impuesto indirecto, se utilizó como variable de ajuste de los precios, con la finalidad de que la población absorba el costo de transferencia de excedente a los consorcios petroleros a través de la subida de precios en el mercado. Esta medida provocó un recorte en el poder adquisitivo de los sectores de la población de ingresos fijos (trabajadores, empleados de clase media, etc.), al mismo tiempo que incrementó los costos de producción de la empresa nacional (Villegas, 2002).

La disposición de los ingresos captados por el Estado, indicador de la política de redistribución del excedente asumida por éste, da cuenta de la tendencia a constreñir los gastos sociales y a incrementar los gastos corrientes, mismos que tienen una importante participación en los gastos fiscales totales. Entre los gastos corrientes, los gastos en servicios personales desde 1985, año de inicio de aplicación de la política neoliberal, hasta el 2000, crecieron continuamente hasta constituir entre el 30% y el 40% de los gastos corrientes en todo el período, y entre el 25% y el 35% de los gastos totales, señal del aumento permanente de la burocracia estatal y/o del abultamiento de sus remuneraciones<sup>3</sup>. En contraste, durante un período de siete años (1995-2001) los gastos sociales apenas significan entre el 13% y 18% de los gastos corrientes (ver Cuadro 1).

**Cuadro 1**  
**Comparación de gastos sociales y gastos corrientes del Estado**  
**(en millones de dólares)**

Rubros	1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001	
Gasto social	183,9	15%	239,4	18%	246,8	15%	245,1	13%	264,9	15%	285,5	16%	295,4	16%
Gastos corrientes	1.189,0	100%	1.318,0	100%	1.665,0	100%	1.853,0	100%	1.771,0	100%	1.826,0	100%	1.891,0	100%

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE, BCB y UDAPE (1995-2001).

Esta política de captación y de redistribución del excedente aplicada por el Estado generó tensiones entre los intereses del gran capital transnacional y los de la mayoría de la población boliviana. En el mismo sentido, se agudizaron las contradicciones con la burocracia estatal privilegiada que absorbe una importante proporción de excedente económico recaudado por el Estado.

**Las políticas estatales de provisión de condiciones generales de reproducción para el capital y sus resultados**

El papel del Estado, según el esquema neoliberal, debería reducirse en este aspecto a establecer una amplia libertad de mercados. La liberalización de mercados construiría el espacio en el que florecería la iniciativa individual junto a la distribución más equitativa de oportunidades y recursos. Se incrementaría la inversión privada con efectos positivos sobre la productividad del trabajo, generando un círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo económico (Montes, 1999). En los hechos, la liberación del mercado de productos en Bolivia se resolvió en el relativo estancamiento y caída de la productividad del trabajo pese a la política salarial de reducción de costos laborales. Entre 1988 y 1994 (período de instalación del neoliberalismo en el país), el costo laboral cayó en -1,63 bolivianos por hora trabajada; paralelamente, la productividad del trabajo mostró un virtual estancamiento con una caída en -0,19 bolivianos en el mismo lapso de tiempo (Arze, 1999[a]); es decir, el país fue perdiendo su capacidad de generación de riqueza social.

Con costos laborales decrecientes, el virtual estancamiento de la productividad del trabajo sólo podía relacionarse con el congelamiento o caída de la inversión industrial. La política de apertura de espacios de inversión al capital privado incentivó la concentración de la inversión privada extranjera en sectores estratégicos, como el hidrocarburífero y el de servicios<sup>4</sup>. La inversión extranjera no vino a ocuparse de la generación de mayor valor agregado o del crecimiento de la productividad de la economía boliviana. Le tocó entonces asumir el desafío a la esmirriada empresa nacional, que, desanimada por sus desfavorables condiciones de competencia en los mercados, no respondió con un aumento de la inversión productiva. La caída de la formación bruta de capital fijo entre 1988 y

1994 en una proporción del 50%, paralela a la reducción de las importaciones de bienes difusores de progreso técnico (CEPAL, 1998), da cuenta de la caída de la inversión privada nacional. En el mismo sentido, la composición de la inversión privada en el país en años de auge del neoliberalismo (1992-1998) muestra una disminución importante de la participación de la inversión en relación a la inversión extranjera directa. Mientras que en 1992 la inversión interna constituía el 55% de la inversión privada, en 1998 ya sólo forma parte de ésta en el 14,4% (Pinto de Loza, 1999).

El cambio en el papel estatal de provisión de condiciones para la producción y realización del capital, al favorecer a la acumulación del gran capital externo, incentivó la inversión extranjera directa, mostrando con claridad que el Estado fue puesto al servicio de la burguesía transnacional con efectos negativos sobre la fracción de la burguesía nativa insertada en el aparato productivo del país. En estas condiciones, la capacidad de competir y de exportar de la industria nacional se deterioró continuamente, al punto en que la balanza comercial concluyó arrojando saldos negativos de forma consecutiva (ver Cuadro 2).

**Cuadro 2**  
**Bolivia – Saldo comercial**  
**(en millones de dólares)**

Años	1980	1990	1995	1998	1999	2000
Saldos	-23	143	-392	-1.347	-1.047	-774

Fuente: CEDLA, INE, CEPAL, 1999

Un importante espacio de realización del excedente de la empresa nacional (por ser el lugar preferido por la población para adquirir los productos necesarios para la reproducción de su fuerza de trabajo), el mercado interno, fue estrechado con medidas como la flexibilización laboral, la cual no trajo, como se decía, ni más ni mejores empleos, sino que se tradujo en el aumento de las tasas de desempleo abierto y en el incremento de la precariedad del empleo, con un índice de subempleo en el país que alcanza al 35% de la población ocupada (INE, 2001). De este modo empeoraron las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo de los bolivianos, al mismo tiempo que se estrecharon los espacios de realización del capital nativo. La misma dinámica limitó el espacio de actividades económicas de pequeña escala de carácter no capitalista, que se constituyó en refugio de la fuerza de trabajo despedida de las empresas estatales privatizadas y/o de las empresas quebradas por la presión del modelo<sup>5</sup>.

Estos resultados de la política de provisión de condiciones generales para la acumulación del capital llevada adelante por el Estado en el transcurso de aproximadamente tre-

ce años terminaron por minar las bases de su legitimación, pero cumplieron el objetivo de la burguesía transnacional: mejorar los espacios de valorización de los grandes consorcios extranjeros. El costo político fue la pérdida de la capacidad integradora del Estado, mediante el discurso ideológico neoliberal, pues los resultados concretos de la política aplicada probaron que el discurso se alejaba de forma tangencial de las ofertas que predicaba y, sobre todo, había provocado que se profundizaran importantes contradicciones entre las clases y las fracciones de clase de la sociedad boliviana. La apertura del mercado de productos no fortaleció a la economía, sino que más bien la debilitó. Así se hizo más notoria la contradicción entre las condiciones necesarias para el desarrollo industrial del país y las impuestas para mejorar la valorización del gran capital extranjero. La flexibilización del mercado laboral empeoró las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo de trabajadores y clases medias, demarcando otro nudo de conflicto entre los intereses de estos sectores de la población y la política de redistribución del excedente económico a favor de los consorcios externos.

Los ajustes en el papel del Estado como proveedor de condiciones generales para la acumulación del capital, en la etapa neoliberal, profundizaron la contradicción entre la producción social y la apropiación privada del excedente que caracteriza al capitalismo. Dicha contradicción se manifiesta, paradójicamente, como crisis de sobreproducción. Los mercados están llenos de productos, pero la mayoría de los bolivianos no tenemos empleo ni ingresos suficientes para satisfacer nuestras necesidades básicas, reproduciéndose el clima de penuria económica, que converge en otro nudo de conflicto, entre el interés de grandes sectores de la población dedicados a actividades económicas de pequeña escala (pequeños comerciantes, artesanos, etc.) por dilatar el mercado interno, y la política que redujo el mercado interno.

### **Manifestación de la crisis económica en las funciones políticas de dominación del Estado**

La acentuación de las contradicciones identificadas devino en el desgaste sostenido, desde fines de los '90, del modelo de acumulación promovido por el neoliberalismo, con tasas de crecimiento del PIB en descenso, el aumento continuo del déficit fiscal, el ascenso de la tasa de desempleo y la caída del ingreso per cápita (ver Cuadro 3).

**Cuadro 3**  
**Principales indicadores económicos de Bolivia 1998-2001**

Años	PIB (tasa de crecimiento)	Inflación (IPC) Variación acumulada anual	Déficit del sector público no financiero/PIB	Tasa de desempleo	Ingreso per Cápita (u\$s Corrientes)
1998	5	4,4	4,7	4,1	1.068
1999	0,4	3,1	3,8	6,1	1.016
2000	2,4	3,4	4,0	8,0	1.001
2001	1,2	0,9	6,5	11,0	935
Promedio	2,2	2,9	(4,7)	7,3	1.005

Fuente: INE, BCB, UPF

En la medida en que el modelo se desgastó, la crisis económica se estableció en el país: situación propicia para que las contradicciones sociales acumuladas por los efectos de la política económica estallen y se manifiesten como crisis política, hasta provocar fisuras en las funciones del Estado. El inicio del debilitamiento de la función de legitimación del Estado tiene como indicador la pérdida del nivel de eficacia integradora del discurso neoliberal. Este proceso se manifiesta con claridad durante el gobierno de la Acción Democrática Nacionalista (ADN) y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) entre 1997 y 2002<sup>6</sup>, con el aumento en número e intensidad de los conflictos sociales<sup>7</sup>, pero fundamentalmente con cambios cualitativos en el carácter de los mismos. Hay modificaciones en el estado de ánimo de las masas: por una parte están más combativas, y por otra sus movilizaciones tienden a la unidad en la resistencia. Estas tendencias se objetivan en la creación de órganos de poder como la Coordinadora del Agua y de la Vida (Orellana, 2001), que unifica la lucha contra el consorcio transnacional "Aguas del Tunari" en la célebre "guerra del agua" (abril de 2001).

La pérdida de la eficacia integradora del Estado se resuelve en la debilidad política del gobierno ADN-MIR, que no logra "hacer respetar el principio de autoridad". De manera sistemática, el ejecutivo plantea que "el gobierno no negociará con presiones" y termina haciéndolo con presiones sociales, bajo condiciones impuestas por los sectores movilizadas. Una muestra de esta propensión se encuentra en las condiciones en que se firmaron los acuerdos de la "Guerra del Agua", con la presión de toda la población movilizada, tanto urbana como rural, que ocupaba la plaza de armas de la ciudad de Cochabamba. Esta pérdida de autoridad alimenta la debilidad política de la coalición MNR-MIR, en un contexto económico en el que toda promesa de mejorar las condiciones de vida de la población ya no tiene el eco anterior a 1997, cuando el discurso de la capitalización<sup>8</sup> como solución a problemas de inversión, crecimiento y empleo había mantenido las expectativas. Se acusa al gobierno continuamente de no contar con un plan de acción para superar la crisis. El tema es que dentro de la lógica de la fracción burguesa en

el poder no hay lugar para un giro de timón. De acuerdo a los intereses de sus aliados, los grandes consorcios extranjeros<sup>9</sup>, no existe razón para modificar las pautas de la producción y redistribución del excedente social.

En el marco de una relativa recuperación del movimiento popular y del debilitamiento político de la clase dominante, una fisura empieza a manifestarse en la función estatal represiva. Los efectos de la política de redistribución del excedente social tocan también al “eslabón débil” del brazo armado del Estado (sargentos, oficiales y clases de la policía), creando un ambiente de malestar en sus filas<sup>10</sup>.

En abril del año 2000, casi en forma paralela al desencadenamiento de la “Guerra del Agua” en Cochabamba, en la ciudad de La Paz, esposas de policías inician una huelga de hambre pidiendo un aumento del 20% en los salarios mensuales de sus maridos y la dotación de chalecos antibala y equipamiento adecuado<sup>11</sup>. Al cabo de dos días este conflicto se generaliza en el país, con la amenaza de cerrar las puertas de los cuarteles. Una importante incorporación de policías que pasan por encima de las instrucciones de sus mandos superiores marca el inicio del agrietamiento en la columna vertebral del Estado burgués: la subordinación jerárquica que garantiza la obediencia obsecuente de la tropa a los mandos superiores de su brazo armado (Lenin, 1997: 24-25). El proceso se profundiza con el desacato policial a la orden de intervenir la huelga de hambre de las esposas de policías, al que sigue el amotinamiento policial del Grupo Especial de Seguridad (GES) en apoyo a las huelguistas. Es el inicio de la adhesión masiva de otras unidades, hasta sumar 2.400 policías amotinados (Trigoso, 2003).

El contenido de las reivindicaciones policiales desnuda la debilidad material del Estado boliviano y el carácter regresivo de la distribución de los recursos fiscales, lógica con la que dentro del aparato estatal se reproduce la discriminación que provoca “ira y bronca” en los “rebeldes de uniforme”: “el dirigente de los policías compartió el criterio de

***“Los movimientos sociales de desacato al estado de sitio se suceden en todo el país, aún con la vuelta de la policía a las calles. El estado de sitio no consigue poner a los movilizados en su sitio: no funciona como instrumento de control y dominación política...”***



que los uniformados que mueren en el servicio diario son de bajo rango, porque arriesgan la piel, el corazón y la vida, por míseros salarios de 480 bolivianos con jornadas de 24 horas; mientras que a los coroneles no les pasa nada, salvo que choquen sus vehículos en estado de ebriedad..." (*Los Tiempos*, 2000)<sup>12</sup>. La gravedad de la situación es tal que el motín policial del 8 de abril termina comandando el desacato al estado de sitio dictado el mismo día por el gobierno ante la magnitud de la movilización social (la "Guerra del Agua" en Cochabamba, los bloqueos campesinos de caminos, y paros cívicos en las ciudades de Oruro, Potosí y Sucre). La ruptura de una parte del brazo armado del Estado es un hecho (Orellana, 2001).

El gobierno busca presionar a los amotinados del GES recurriendo a la otra fracción de su aparato represivo, el ejército. Se provoca un enfrentamiento entre ejército y policías, en el que se hace evidente que los policías no están dispuestos a ceder. Dada la correlación de fuerzas, la derrota del gobierno se da en todos los planos. Presionado por la situación, éste concede un aumento de salario a los policías de bajo rango del 50%, significativamente mayor al 20% solicitado. En el otro frente de batalla, el gobierno acepta la ruptura del contrato con la transnacional Aguas del Tunari, causa principal de la "Guerra del Agua"<sup>13</sup>. La autoridad del gobierno queda seriamente afectada, y éste no logrará recuperarla. Los movimientos sociales de desacato al estado de sitio se suceden en todo el país, aún con la vuelta de la policía a las calles. El estado de sitio no consigue poner a los movilizados en su sitio: no funciona como instrumento de control y dominación política, y el gobierno se ve obligado a suspenderlo a trece días de haberlo dictado. La evidencia del agrietamiento de Estado muestra en esta ocasión tendencias que se revelarán con mayor claridad en las jornadas de febrero de 2003, como el crecimiento de la simpatía entre los policías de base hacia las reivindicaciones populares y la emergencia de indicios de ruptura de la unidad de burguesía nativa, con críticas públicas del empresariado privado a la política gubernamental y el pedido del MNR de renuncia al Presidente Hugo Banzer Suárez por la pérdida de legitimidad y autoridad que ha tenido su gobierno. En esta ocasión, el MNR convoca a la población a sumarse a su solicitud, al constituir ésta, según su punto de vista, la única alternativa para evitar la guerra civil y para sacar al país de la crisis política y económica (*La Razón*, 2001).

Esta fisura abierta en el Estado no se soldó, debido a que no cambiaron las condiciones materiales ni políticas que la generaron. Más bien, si el "sufragio universal no es más que el termómetro del estado de ánimo de los electores" (Engels, 1997), los resultados electorales de junio de 2002 mostraron la modificación en la correlación de fuerzas, con la amplia votación obtenida por una opción electoral que criticaba, al menos en apariencia, la política neoliberal: el Movimiento al Socialismo (MAS)<sup>14</sup>. Las condiciones económicas y políticas no se presentaban nada fáciles para los partidos de la burguesía que accedieron al poder en agosto de 2002 (la coalición MNR-MIR). Con el discurso de la capitali-

zación desgastado, el déficit fiscal abultado, el enfriamiento de la economía con su secuela de quiebra de empresas nacionales y cierre de fuentes de trabajo, cualquier movimiento en falso pondría a prueba el aparente equilibrio que sostuvo el primer semestre del gobierno de Sánchez de Lozada. La prueba de fuego llegó cuando en el intento de restablecer el equilibrio fiscal se quiso recortar aún más el magro ingreso de los trabajadores, aplicando un impuesto de hasta el 12,5% sobre sueldos y salarios.

La lucha estalló por la grieta que había dejado en el Estado la rebelión policial de 2000. El 11 de febrero de 2003, los policías del GES inician un amotinamiento en la ciudad de La Paz en contra de lo que se vino a llamar el “impuestazo”, pidiendo a la par un aumento salarial del 40%. El movimiento policial se extendió como reguero de pólvora por las ciudades principales. El alto mando policial perdió el control sobre sus subordinados, los oficiales de la Unidad Móvil de Lucha Contra el Narcotráfico se acuartelaron junto a la Policía Departamental en Cochabamba, en Santa Cruz los policías de la cárcel de Palmasola se pertrecharon. Como mencionó un analista del conflicto: “el Estado se halla suspendido en el aire sin poder precautelar la sacrosanta propiedad privada. Así la rebelión policial desbroza el camino para un conflicto abierto entre las clases” (Orellana, 2003). La fisura de las funciones estatales, tanto legítimas como represivas, dejó el espacio para que la población, al expresar instintivamente su descontento y cansancio con el estado de cosas existente, se transformara en turba, en multitud enardecida que destruyó a su paso todos los emblemas del dominio burgués: oficinas de la burocracia estatal, instala-



© Pablo Delance

ciones de empresas transnacionales, oficinas de los partidos de gobierno. La turba relaciona su miseria con toda esta estructura de poder incapaz de resolver sus problemas más apremiantes y envuelta en prácticas corruptas a las que el pueblo culpa del hundimiento del país<sup>15</sup>.

La rebelión obligó a frenar el intento de la fracción burguesa en el poder de costear el déficit fiscal con el ingreso de los trabajadores: al día siguiente de la rebelión policial, el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada apareció en televisión deslucido y tembloroso para comunicar que se había decidido retirar el proyecto de Presupuesto General de la Nación en el que se incluía el impuesto al salario. ¡Qué diferencia con el prepotente y burlón "Goni" de tiempos de la capitalización! Este cambio de actitud es la muestra más fehaciente de la debilidad política de la burguesía nativa, que se manifestó en el recrudescimiento de tendencias a la división en sus filas: corren rumores de que existen distintas opiniones dentro del MNR y de que hay parlamentarios de este partido que no están de acuerdo con el "impuestazo". Los empresarios privados se alían al MAS para manifestar su rechazo al "impuestazo", que estrecharía aún más el ya reducido mercado interno<sup>16</sup>. La empresa privada nacional, otrora propulsora del modelo neoliberal, pide que "el nuevo presupuesto nacional no sea sólo el resultado de un proceso de manipulación cuantitativa de cifras, sino que refleje un cambio en el modelo económico" (declaraciones a la prensa del representante de la empresa privada Don Carlos Calvo, el 17 de febrero de 2003). Las voces de protesta por el desgobierno y la incapacidad para resolver la crisis son el telón de fondo del pedido de renuncia al Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada por parte de la oposición parlamentaria que conforman el Movimiento al Socialismo (MAS) y la Nueva Fuerza Republicana (NFR).

### **Las posibilidades de la burguesía de amalgamar la fisura en las funciones del Estado**

Se ha generado una situación política en la que la agudización de las contradicciones entre las clases y entre las fracciones de clase es tal, que todo intento de restablecer el equilibrio fiscal desemboca en inestabilidad política. La incapacidad de la burguesía nativa en el poder para lograr el equilibrio fiscal sin profundizar las contradicciones inmanentes al modelo emana de su propia naturaleza de clase: su ligazón umbilical a los intereses de acumulación de consorcios transnacionales<sup>17</sup>. Esta fracción de la burguesía no hará nada que perjudique al gran capital privado. Más bien volverá a intentar descargar el peso del déficit fiscal sobre los sectores sociales subordinados. En estos días [abril de 2003] alcanza visos de escándalo el anuncio del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada de que se costeará la disminución del déficit fiscal con los fondos provenientes de la condonación de la deuda externa (HIPC II) destinados a la "lucha contra la pobreza"<sup>18</sup>.

Debido a las limitaciones de clase que tiene la fracción burguesa en el poder, y a la continua presión que ejerce sobre ella la política imperialista canalizada por instituciones como el Fondo Monetario Internacional, se dificulta la posibilidad de restablecer las herramientas de legitimación e integración estatal devastadas por más de quince años de neoliberalismo en el país mediante reformas destinadas a neutralizar las contradicciones profundizadas por el modelo. La fracción de la burguesía golpeada por el modelo, cuya debilidad económica se expresa en su incapacidad política para imponer un modelo de acumulación centrado en el mercado interno, acorde con sus intereses, encuentra sus limitaciones para resolver la crisis política y económica en la reedición de su fracaso histórico (aunque en un contexto histórico diferente al que rodeó su fracaso dentro del patrón de acumulación 1952-1985) para desarrollar las propias bases de su legitimidad: industrializando el país, creando fuentes de trabajo y estableciendo condiciones mínimas de explotación de la fuerza de trabajo.

Las limitaciones de clase de ambas fracciones de la burguesía muestran que la grieta abierta en el brazo armado del Estado no será cerrada con facilidad. Los nuevos conflictos sociales que se generen por el reparto del excedente social en el país abrirán la posibilidad de que la fisura en el Estado sea parte de la pugna que defina quiénes costearán el déficit fiscal a consecuencia de la crisis del modelo. El resultado de los enfrentamientos dependerá de la iniciativa política y de la fuerza que muestren los sectores en pugna: o la fracción de la burguesía aliada a las transnacionales impone su razón de clase ahogando las movilizaciones populares pese al desgaste de su aparato estatal, o el movimiento popular capitaliza a su favor la fisura del Estado y frena los reiterados intentos de la burguesía de cargar el costo de la crisis sobre sus espaldas.

## Bibliografía

- Arze, Carlos 1999[a] *Costos laborales y competitividad en la industria boliviana* (La Paz: CEDLA).
- Arze, Carlos 1999[b] "Empleo y relaciones laborales", en CIDES-UMSA *Bolivia hacia el Siglo XXI* (La Paz: CIDES-UMSA).
- Banco Central de Bolivia 2002 *Boletín del Sector Externo* (La Paz: Ofsett-BCB) N° 27.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe 1998 *Balance preliminar de la Economía de América Latina y el Caribe* (Santiago de Chile: Naciones Unidas).
- Engels, Federico 1997 (1987) *El origen de la Familia, la Propiedad privada y el Estado* (Madrid: Fundación Federico Engels).
- Fundación Milenio 2002 *Informe de Milenio sobre la Economía* (La Paz: Milenio) N° 13.
- Grebe, Horst 1999 "Los Ciclos del Desarrollo Boliviano. Principales Tendencias y Cambios del Siglo XX", en CIDES-UMSA *Bolivia hacia el Siglo XXI* (La Paz: CIDES-UMSA).

- Instituto Nacional de Estadística 2001 *Anuario Estadístico 2001 de Bolivia* (La Paz: INE).
- Laredo, Jaime 2003 "Fuerte oposición de empresarios y trabajadores al nuevo tributo", en *Los Tiempos* (Cochabamba).
- La Razón* 2002 (La Paz) 9 de diciembre.
- La Razón* 2001 "El MNR: Pide Renuncia del Presidente de la República" (La Paz) 21 de abril.
- Larrazabal, Hernándo 1996 "Empleo e ingresos en diez años de reformas estructurales", en ILDIS-CEDLA *Informe Social Bolivia 2* (La Paz: OFAVIM).
- Larrazabal, Hernándo et al 2000 *Ajuste Estructural y Desarrollo Productivo en Bolivia* (La Paz: CEDLA).
- Laserna, Roberto y Villarroel, Miguel 1999 *29 años de conflictos en Bolivia (1970-1998)* (Cochabamba: CERES).
- Lenin, Vladimir 1997 *El Estado y la Revolución* (Madrid: Fundación Federico Engels).
- Los Tiempos* 2003[a] (Cochabamba) 13 de febrero.
- Los Tiempos* 2003[b] "El rechazo al 'impuestazo'" (Cochabamba) 12 de febrero.
- Los Tiempos* 2000 "Indignación policial por discriminación salarial" (Cochabamba) 4 de abril.
- Mandel, Ernest 1987 (1979) *El Capitalismo Tardío* (México: Era).
- Montes, Pedro 1999 (1996) *El desorden neoliberal* (Madrid: Trotta).
- Orellana, Lorgio 2003 "Síntomas del inicio de crisis política en la clase dominante", en *Opinión* (Cochabamba) 16 de febrero.
- Orellana, Lorgio 2001 *El proceso insurreccional de abril: Estructuras materiales y superestructuras organizativas de los campesinos regantes en el Valle Central Cochabambino* (Investigación desarrollada en el marco del Programa de Becas CLACSO-ASDI para investigadores jóvenes) mimeo.
- Pinto de Loza, Carolina 1999 "Bolivia: apertura, empresa y competitividad", en CIDES-UMSA *Bolivia hacia el Siglo XXI* (La Paz: CIDES-UMSA).
- Trigoso, Gonzalo 2003 "Los rebeldes de uniforme", en *Opinión* (Cochabamba) 16 de marzo.
- Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 2001 *Dossier de Estadísticas Sociales y Económicas* (La Paz: UDAPE) Vol. 11.
- Villegas, Carlos 2002 *Privatización de la Industria Petrolera en Bolivia, trayectoria y efectos tributarios* (La Paz: Plural).

## Notas

1 Bolivia, al igual que otros países del área, desarrolla sus políticas estatales en estrecha consulta con el Fondo Monetario Internacional con la finalidad de que éste apruebe desembolsos de recursos para enfrentar los desequilibrios crónicos de la Balanza de Pagos o para realizar otro tipo de inversiones. Es dentro de esta lógica que debe entenderse tam-

bién la imposición del Fondo de franjas en las que se debe mantener el déficit fiscal, que en los últimos tiempos ha provocado en el país una seria crisis política.

2 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa estatal más importante en términos económicos en Bolivia entre 1990 y 1996, transfirió al TGN un promedio anual de 302 millones de dólares (65% del total de su ventas internas y externas), que constituían el 40% de los ingresos del Tesoro General de la Nación.

3 Los cargos jerárquicos del Estado, desde el Presidente hasta los superintendentes, pasando por los ministros, tienen sueldos relativamente altos, que oscilan entre los 4.000 y 7.000 u\$s. Por otra parte, la creación de nuevos puestos en la burocracia estatal se convirtió en práctica común de todos los gobiernos como mecanismo para dar cabida a la siempre creciente clientela política.

4 En el período de mayor penetración de la Inversión Extranjera Directa por los procesos de privatización de las empresas estatales (1996-1998) se observa la fuerte concentración de este tipo de inversión en los sectores de servicios y de hidrocarburos. Para 1996 el 70% de la Inversión Extranjera Directa se destina a estos sectores, mientras que al sector industrial apenas se dirige el 17%. En 1997 esta tendencia se profundiza: en los sectores de servicios y de hidrocarburos se concentra el 90% de la inversión, y sólo el 3% se dirige a la industria. Lo mismo ocurre en 1998, cuando el 94% de la Inversión Extranjera Directa se concentra en hidrocarburos y servicios y sólo el 2% se destina al sector industrial (Larrazabal et al, 2000: 96).

5 Investigaciones realizadas por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Arze, 1999[a]) demuestran que el 90% del total de nuevos empleos creados en Bolivia entre 1992 y 1998 ha sido generado por actividades de pequeña escala de carácter no capitalista.

6 En realidad este gobierno fue formado por un grupo más amplio de partidos, por lo que llamaron a esta coalición la "mega-coalición". Junto a los partidos más importantes, MIR y la ADN, se encontraban partidos de menor importancia y peso político, como Conciencia de Patria (CONDEPA) y Unión Cívica Solidaridad (UCS).

7 Una relación del número promedio de conflictos realizada por el Centro de Estudios de la Realidad Regional (Laserna y Villarroel, 1999) muestra que el período de 1993 a 1997, en el que el gobierno de la coalición MNR-MIR, con Gonzalo Sánchez de Lozada a la cabeza, presenta un promedio de 13,15 conflictos nuevos por mes, mientras que en el período 1997-2002, en el que se hace cargo del gobierno la coalición ADN-MIR, con Hugo Banzer Suárez como presidente, el promedio mensual sube sustancialmente a 28,42 conflictos nuevos por mes, un indicador del cambio en la situación política que enfrenta la clase dominante.

8 En Bolivia la capitalización fue el nombre que se dio al proceso de privatización de las grandes empresas estatales, con la promesa de que mediante esta capitalización se generarían 500.000 empleos y tasas de crecimiento de hasta el 11% (Plan de Todos, Programa de Gobierno del MNR de 1993 a 1997).

9 La relación se establece en muchos casos de manera directa. Es el caso del Presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, que es socio del Banco Mundial en la explotación de la mina Mario, sociedad de la que el Banco Mundial participa en el 11% de las acciones.

10 Se trataba de un proceso que se vino gestando desde fines de 1999, cuando explosiones de bomba en la ciudad de La Paz activaron un conflicto en el cuerpo represivo del Estado, desatando acusaciones y contra-acusaciones entre policías y militares. Estos hechos nunca fueron esclarecidos, pero sin embargo constituyeron la señal de un malestar profundo en el seno de la policía, que ya desde meses atrás enfrentaba problemas presupuestarios, hasta el punto de que las instalaciones policiales se quedaron sin luz por falta de pago. Paralelamente la policía enfrentó un problema con el gobierno para retener en sus manos el Registro de Identificación Nacional que le proporcionaba recursos. Era notorio que padecía las consecuencias del déficit presupuestario y del reparto discriminatorio del mismo (Orellana, 2001). Por otra parte, la corrupción también generó malestar en la institución policial. Se habían producido varias destituciones de Comandantes de Policía en el transcurso de los últimos tres años por actos de corrupción relacionados con protección al narcotráfico, compras irregulares de terrenos, manejo indiscriminado de cargos y tráfico de influencias (*La Razón*, 2002).

11 La situación del equipamiento policial es tal que, de acuerdo con declaraciones de los propios policías, sólo se cuenta con trescientos chalecos antibalas para ser usados por 21.000 efectivos. La última dotación de armas data de 1987 y es considerada obsoleta. El Comando General de la Policía debe renovar su arsenal cada cinco años con los remanentes de sus ingresos por recaudaciones. Las balas usadas por los efectivos deben ser pagadas por ellos mismos, ¡si quieren preservar su integridad!

12 Un suboficial con veintiocho años de experiencia declaraba a la prensa que la clase policial siempre ha sido relegada. Los sueldos oscilan entre 800 bolivianos (100 u\$s) y 1.300 bolivianos (170 u\$s): "Yo con mis veintiocho años de experiencia apenas gano 1.300 bolivianos y si a esto se quiere aplicar el "impuestazo", mi salario es mínimo, ¿no?" (*Los Tiempos*, 2003[a]).

13 Esta guerra se desató por el aumento indiscriminado de las tarifas de agua que aplicó la empresa Aguas del Tunari, transnacional que privatizó el servicio de agua potable en Cochabamba, que afectó tanto a la población urbana como rural, sentando las bases para la unificación de los campesinos regantes del entorno rural de Cochabamba y trabajadores y clases medias del área urbana que se expresó en la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida. Este movimiento se caracterizó por la participación masiva de la población urbana y rural y por enfrentamientos sostenidos entre la población y las fuerzas del orden. La unidad en la lucha y la masiva movilización terminaron por vencer al gobierno, consiguiendo la ruptura del contrato con la transnacional.

14 Si bien el Movimiento al Socialismo critica continuamente la política neoliberal, el carácter reformista de sus propuestas ha limitado la posibilidad de que se convierta en dirección real de las aspiraciones del movimiento popular en Bolivia, y más bien se nota un proceso de acomodación por parte de sus dirigentes a las reglas de juego establecidas por el gobierno. Al respecto, fue notorio el escándalo que protagonizaron dos de sus representantes parlamentarios al reunirse con los ejecutivos de gobierno a espaldas de su máximo dirigente, Evo Morales, para negociar la crisis generada por el bloqueo de caminos de campesinos coccaleros del Chapare en enero de 2003.

15 Es emblemático el desmantelamiento de la Casa Rosada, sede del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y del bufete del hombre fuerte del MNR, Carlos Sánchez Ber-

zaín. La destrucción de las instalaciones de grandes empresas privadas como la Cervecería Boliviana Nacional y Coca Cola da cuenta de la identificación que hace la población de la fuente de la que emana su malestar económico y social.

16 Esta tendencia derivó en reuniones entre dirigentes de la empresa privada, la Central Obrera Boliviana y la oposición parlamentaria liderada por el Movimiento al Socialismo (MAS), orientadas al inicio de un trabajo conjunto para reactivar el aparato productivo del país (*Los Tiempos*, 2003[b]).

17 Queda claro que el gobierno no piensa aumentar el impuesto sobre las utilidades de las grandes empresas petroleras. A fines de enero de este año volvió a subir el Impuesto Especial a los Hidrocarburos (Decreto N° 26.926, 25 de enero de 2003), impuesto indirecto que grava a los consumidores y libera de la carga a las transnacionales petroleras.

18 Estos fondos están formados por la política de condonación de la deuda externa, dirigida a aliviar la precaria situación social de los sectores más deprimidos de la población en los países endeudados de menor desarrollo relativo. De ahí que los fondos están destinados a programas de lucha contra la pobreza; sin embargo, el gobierno boliviano parece decidido a destinar dichos fondos a la disminución del déficit fiscal que aqueja al Estado, a costa de disminuir la ayuda a los pobres del país.